

**JUICIOS DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL
ELECTORAL Y PARA LA PROTECCIÓN DE
LOS DERECHOS POLÍTICO
ELECTORALES DEL CIUDADANO**

EXPEDIENTES: SM-JRC-164/2015, SM-JRC-177/2015, SM-JDC-532/2015 Y SM-JDC-537/2015, ACUMULADOS

ACTORES: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y OTROS

RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

MAGISTRADO PONENTE: MARCO ANTONIO ZAVALA ARREDONDO

SECRETARIA: JESSICA LAURA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ

Monterrey, Nuevo León, a trece de agosto de dos mil quince.

Sentencia definitiva que **a) revoca**, en lo que fue materia de impugnación, la dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, al estimar que se debe inaplicar al caso concreto el artículo 312, párrafo cuarto, de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, en la porción normativa que dice “la celebración de la audiencia”; y acreditarse falta de exhaustividad en la valoración de pruebas, en el estudio de los agravios, así como por anularse incorrectamente la votación recibida en la casilla 2320 básica, a pesar de que el funcionario cuestionado sí pertenece a la sección; y **b) ordena** emitir una nueva resolución conforme los lineamientos precisados en esta sentencia.

GLOSARIO

<i>Alianza:</i>	Coalición “Alianza por tu Seguridad” integrada por los partidos políticos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Demócrata
<i>Comisión Municipal:</i>	Comisión Municipal Electoral de Juárez, de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León
<i>Constitución Federal:</i>	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
<i>Ley de Medios:</i>	Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral
<i>Ley Electoral Local:</i>	Ley Electoral para el Estado de Nuevo León

PAN: Partido Acción Nacional

PRI: Partido Revolucionario Institucional

Tribunal Tribunal Electoral del Estado de Nuevo
Responsable: León

1. ANTECEDENTES DEL CASO

1.1. Jornada electoral. El siete de junio de dos mil quince se celebró la elección para la renovación de ayuntamientos en Nuevo León, entre ellos, el del municipio de Juárez.

1.2. Cómputo municipal. En sesión que inició el diez de junio y concluyó el doce siguiente,¹ la *Comisión Municipal* efectuó el cómputo de la elección del ayuntamiento de Juárez, Nuevo León, en el que la planilla postulada por el partido Encuentro Social obtuvo el triunfo, al tener la mayor votación, como se muestra a continuación:²

2

	PES	<i>Alianza</i>	PAN	MC	PT	MORENA	PH	PRD
Votos	30,182	29,735	18,814	2,411	1,096	982	967	582

Asimismo, la *Comisión Municipal* declaró la validez de la elección y expidió la constancia de mayoría correspondiente.³

1.3. Medios de impugnación local. Contra los resultados consignados en el acta de cómputo municipal respectiva, el diecisiete de junio de dos mil quince, se promovieron diversos juicios de inconformidad ante el *Tribunal Responsable*, en los que se solicitó la nulidad de votación recibida en diversas casillas, así como la modificación en la asignación de regidurías de representación proporcional, los juicios fueron radicados bajo el número de expediente JI-89/2015 y sus acumulados.

¹ A las veintiuna horas con quince minutos del once de junio se declaró el último receso para que la *Comisión Municipal* expidiera y entregara las constancias a la planilla de candidatos que obtuvo la mayoría de votos y a los candidatos que obtuvieron las regidurías de representación proporcional, la cual fue reanudada a las dieciséis horas con quince minutos del siguiente doce de junio.

² Véase acta circunstanciada relativa a la sesión permanente de cómputo agregada en primer término en el cuaderno accesorio 5 del expediente SM-JRC-164/2015.

³ Las constancias de representación proporcional se expidieron y entregaron a los candidatos de la *Alianza* y del *PAN*.

1.4. Prueba superveniente. El dos de julio siguiente, el *PRI* ofreció como prueba superveniente en el juicio local, la documental pública consistente en el acta fuera de protocolo número 81,241/2015.⁴

En la misma fecha, el Magistrado Presidente del *Tribunal Responsable* la desechó en virtud de haber sido ofrecida con posterioridad a la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Contra dicha determinación el *PRI* interpuso recurso de reclamación, el cual fue resuelto por el *Tribunal Responsable* el posterior día ocho, en el sentido de confirmar el desechamiento.⁵

1.5. Resolución impugnada. El nueve de julio del año en curso, el *Tribunal Responsable*, entre otras cuestiones, declaró la nulidad de la votación recibida en tres casillas, confirmó la votación recibida en los demás centros de votación combatidos, la declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de mayoría correspondiente; asimismo, ordenó a la *Comisión Municipal* la realización de los cálculos pertinentes para determinar si subsistía la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional o, en su caso, efectuara la reconfiguración correspondiente.

3

2. COMPETENCIA

Esta sala regional es competente para resolver los presentes juicios al estar relacionados con la renovación del ayuntamiento de Juárez, Nuevo León, entidad comprendida en la segunda circunscripción plurinominal, sobre la cual ejerce jurisdicción este órgano colegiado.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 195, fracciones III y IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 83, párrafo 1, inciso b), y 87, párrafo 1, inciso b), de la *Ley de Medios*.

3. ACUMULACIÓN

Del análisis de las demandas se advierte que se señala como responsable a la misma autoridad y se cuestiona la misma resolución, por lo cual, para garantizar la economía procesal y evitar sentencias contradictorias, se decreta la acumulación de los juicios SM-JRC-177/2015, SM-JDC-532/2015 y SM-

⁴ Pasada ante la fe del notario público número ciento treinta y tres del estado de Nuevo León.

⁵ El doce de julio el *PRI* impugnó la determinación ante esta Sala Regional. El juicio fue radicado bajo el número de expediente SM-JRC-159/2015 y la demanda fue desechada, por falta de definitividad, el diecisiete de julio del año en curso.

SM-JRC-164/2015 Y ACUMULADOS

JDC-537/2015 al SM-JRC-164/2015, debido a que fue éste el primero que se registró en esta Sala Regional, debiéndose agregar copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los expedientes que se acumulan.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 199, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y 79 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

4. IMPROCEDENCIA DE LOS ESCRITOS DE TERCERO INTERESADO

Se tienen por no presentados los escritos de Encuentro Social en su carácter de tercero interesado, en los juicios identificados con las claves SM-JRC-164/2015 y SM-JDC-532/2015, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 12, párrafo 1, inciso c), 17, párrafo 4 y 19, párrafo 1, inciso d), de la *Ley de Medios*, toda vez que fueron interpuestos de manera extemporánea ante el *Tribunal Responsable*.

- 4 La autoridad responsable publicitó la demanda que originó los referidos juicios a las veintitrés horas del trece de julio del año en curso,⁶ por consiguiente, el término de setenta y dos horas para comparecer al juicio venció el dieciséis siguiente a la misma hora. Sin embargo, ambos escritos se presentaron extemporáneamente, el posterior día dieciocho.⁷

5. ESTUDIO DE FONDO

5.1. Planteamiento del caso

Los promoventes pretenden la modificación o revocación de la sentencia combatida con tres propósitos específicos. Con argumentos enfocados en la valoración probatoria, el *PRI* y Heriberto Treviño Cantú, el candidato de la *Alianza* a la presidencia municipal, buscan la declaración de la nulidad de la votación de las casillas instaladas en una sección, pues la reconfiguración del cómputo municipal traería, a su favor, un cambio de ganador en estos comicios. Por su parte, Encuentro Social se inconforma de que sus pretensiones de invalidez de votación formulados en la instancia local hayan sido desestimados, como también se duele de aquellas nulidades declaradas

⁶ Véase las cédulas de notificación por estrados que obran en las fojas 76 y 108, respectivamente, de los expedientes SM-JRC-164/2015 y SM-JDC-532/2015.

⁷ Lo que se advierte de los sellos de recepción por parte del *Tribunal Local*, visibles a fojas 92 y 118, respectivamente, de los referidos expedientes.

por el *Tribunal Responsable*, a partir de los agravios del *PRI*. Lo que espera, a final de cuentas, Encuentro Social es la conservación de su triunfo en la elección de mayoría. Finalmente, Félix César Salinas Morales solicita que le sea asignada una regiduría de representación proporcional, con base en una lectura muy particular del último párrafo del artículo 271 de la *Ley Electoral Local*.

A continuación se precisan las razones en que apoyan cada uno sus pretensiones.

5.1.1. Argumentos del *PRI* y de Heriberto Treviño Cantú

Los enjuiciantes argumentan que una correcta valoración del cúmulo probatorio que obra en el expediente local demuestra la causal de nulidad que invocaron,⁸ relativa a presión sobre el electorado, en las siete casillas de la sección 841, del distrito local 22 de Nuevo León, en el municipio de Juárez, al estimar que tal causal requiere un tratamiento concienzudo y exhaustivo, de lo cual, aducen, carece la sentencia impugnada.⁹

Los actores se inconforman de una indebida valoración del acta fuera de protocolo 24,318/2015, al sostener que debe otorgársele valor probatorio pleno, puesto que, al consignar hechos sucedidos en determinado evento, se tiene la certeza que los mismos acontecieron, y porque el notario público que la expide tiene facultad de autenticar lo ahí descrito. También consideran inaceptable relacionar esta documental con una hoja de incidentes e investirla de valor probatorio pleno, al ser un acta electoral emitida por funcionarios de casilla.

Los promoventes alegan que se dejaron de valorar pruebas ofrecidas y, por ende, no se administraron de manera lógica todos los medios de convicción que obraban en el expediente, ya que fragmentar cada prueba les resta valor probatorio sobre lo que se quiere demostrar.

⁸ Refieren que se debieron valorar los informes rendidos por la autoridad demandada, los dos escritos presentados ante la *Comisión Municipal* el día de la jornada electoral, el informe aportado por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito del municipio de Juárez, así como la hoja de incidentes de la casilla 841, contigua 3.

⁹ La causal de nulidad que invocaron se establece en el artículo 329, fracción VII de la *Ley Electoral Local*.

“Artículo 329. La votación recibida en una casilla será nula:

[...]

VII. Ejercer violencia física o amenazas sobre los miembros de la Mesa Directiva de Casilla o sobre los electores y siempre que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación; [...]

También afirman que la gravedad y determinancia se acreditan al considerar el porcentaje de la votación afectada durante casi cinco horas, en relación a la votación recibida en cada una de las casillas cuestionadas, cuyo resultado es superior a la diferencia entre el primero y segundo lugar.

Por otro lado, consideran que existe una confusión por no distinguir la bidimensionalidad que encierra la causal de nulidad en cada contexto, pues depende tanto del criterio cualitativo como cuantitativo para inferir lógicamente la cantidad de electores que pudieron resultar afectados con base en una ponderación de principios, al ser casi imposible, absurdo e irrazonable, desde el aspecto probatorio, demostrar la presión sobre el electorado por cada elector, y arrojar la carga de la prueba al justiciable, ya que la causal de nulidad invocada protege o tutela los valores de libertad, secreto, autenticidad y efectividad en la emisión del sufragio.

6

La demostración de la causal invocada en su aspecto cualitativo requiere obligatoriamente un análisis global del cúmulo probatorio, concatenación lógica donde inferencialmente se formulen procesos racionales de comprensión y no solamente un análisis mecánico y subjetivo de las pruebas sin tomar en cuenta los hechos desde el plano objetivo. Así, los medios de convicción deben ser sometidos a un test probatorio a fin de determinar plenamente si los mismos son suficientes para tener por colmada la presión sobre el electorado.

En otro orden, les causa agravio que el *Tribunal Responsable* confirmara el desechamiento de la prueba superveniente por ser ofrecida con posterioridad a la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, y que se dejara de analizar por una aplicación indebida de tecnicismos legales, lo cual se traduce en una denegación de justicia. Ante ello, pretenden se declare la inaplicabilidad del artículo 312 de la *Ley Electoral Local*, específicamente la parte final del párrafo cuarto, que establece, las pruebas supervenientes solo podrán ofrecerse hasta antes de la audiencia.¹⁰

5.1.2. Argumentos de Encuentro Social

¹⁰ “Artículo 312.

[...]

En las resoluciones o sentencias, en ningún caso se tomarán en cuenta las pruebas ofrecidas o aportadas fuera de los plazos legales. La única excepción a esta regla será la de las pruebas supervenientes, entendiéndose por tales los medios de convicción surgidos después del plazo legal en que deban aportarse los elementos probatorios y aquellos existentes desde entonces, pero que el promovente, el compareciente o la autoridad electoral no pudieron ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir obstáculos que no estaban a su alcance superar, siempre y cuando se aporten antes de la celebración de la audiencia.”

El partido se inconforma de que el *Tribunal Responsable*, al resolver los conceptos de anulación hechos valer por Heriberto Treviño Cantú y la *Alianza*, de forma indebida declaró la nulidad de la votación recibida en las casillas 839, contigua 4, 2320 básica y 2333 básica, con el argumento de que se integraron indebidamente con personas que no pertenecen a la sección. En su concepto, quienes recibieron los sufragios fueron personas facultadas por la ley al residir en la sección y estar en la lista nominal de electores.

También considera ilegal, inconstitucional y contrario a los tratados internacionales, el que no se anulara la votación recibida en las casillas 835 contigua 1, 847 básica, 2391 básica, 2400 contigua 1 y 2661 contigua 1, aun cuando se recibió por personas no autorizadas por la ley, lo que hacía suficiente la causal de nulidad alegada.

5.1.3. Argumentos de Félix César Salinas Morales

El actor alega, en esencia, que el *Tribunal Responsable* no analizó los agravios “octavo, noveno y décimo” de su demanda, en los cuales planteó la pretensión de que debía asignarse una regiduría adicional por el principio de representación proporcional a favor de la *Alianza*, misma que le correspondería a su persona.

7

También expone que el *Tribunal Responsable* no analizó ni valoró adecuadamente las pruebas ofrecidas en su demanda, pues las desechó de manera indebida en la audiencia respectiva, “sobre todo, las que verdaderamente tienen relación pertinente con la litis planteada.” Por último, el ciudadano promovente se duele que la “constancia de cómputo del Ayuntamiento de Guadalupe, Nuevo León, no fue analizada, ni siquiera mencionada.”

El estudio que, en su caso, haya necesidad de efectuarse respecto de los agravios que anteceden se hace en el mismo orden en que se han expuesto.

5.1.4. Consideraciones de la sentencia reclamada que, ante la falta de inconformidad, deben permanecer intocadas

La comparación entre lo resuelto por el *Tribunal Responsable* y los motivos de agravio resumidos en los apartados precedentes revela que los siguientes pronunciamientos no han sido controvertidos por los promoventes:

Considerando séptimo, apartado 1 (demanda presentada por Félix César Salinas Morales). Desestimación relacionada con la aplicación de las reglas de asignación de regidurías de representación proporcional, conforme el artículo 271 de la *Ley Electoral Local* y numeral 19 de los Lineamientos y Formatos Generales para el Registro de las Candidatas y los Candidatos del año dos mil quince.

Considerando séptimo, apartado 3 (demanda presentada por Heriberto Treviño Cantú y la Alianza). Desestimación de la causal contemplada en la fracción IV, del artículo 329 de la *Ley Electoral Local*, relativa a que se reciba la votación por personas y organismos distintos a los facultados por la ley, respecto de las siguientes casillas:

2680 básica	2689 básica	838 básica	841 básica
841 contigua 1	841 contigua 3	841 contigua 6	842 básica
842 contigua 1	2316 básica	2381 básica	2323 básica
2324 básica	2332 básica	2349 contigua 1	2689 básica
2689 contigua 1	2691 contigua 1		

8 Desestimación de la causal contemplada en la fracción XIII, del artículo 329 de la *Ley Electoral Local*, relativa a irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo, respecto de las siguientes casillas:

838 básica	839 contigua 3	839 contigua 5	841 básica
842 básica	842 contigua 1	2216 básica	2318 básica
2320 básica	2323 básica	2324 básica	2332 básica
2333 básica	2349 básica	2349 contigua 1	2689 básica
2689 contigua 1	2691 contigua 1		

Desestimación del concepto de anulación relativo a que votaron personas que no viven en el municipio de Juárez, Nuevo León, respecto de la votación recibida en las secciones: 837, 838, 839, 841, 842, 845, 2337, 2356 y 2691.

Dado que los mencionados pronunciamientos por parte del *Tribunal Responsable* no se reclamaron, deben subsistir en sus términos.

5.2. El *Tribunal Responsable* no valoró todo el acervo probatorio y el desechamiento de una probanza se fundó en una norma que es contraria a la *Constitución Federal*.

Tiene la razón el *PRI* y el candidato de la *Alianza* Heriberto Treviño Cantú porque, en efecto, el *Tribunal Responsable* violó su derecho de defensa en su vertiente probatoria, ya que, por un lado, omitió valorar probanzas que en su momento fueron propuestas, admitidas y desahogadas y, por otro, desechó indebidamente una prueba superveniente.

5.2.1. Pruebas que no fueron valoradas pese a haber sido admitidas

Tocante al primer aspecto, la violación constatada se advierte fácilmente si se comparan los elementos de prueba que fueron aportados para acreditar que en las casillas de la sección 841 se produjo presión sobre el electorado, con aquellos expresamente considerados en la resolución que ahora se combate. Así, las pruebas ofrecidas, admitidas y desahogadas en relación a este tema fueron:¹¹

- 1) Documental pública. Acta fuera de protocolo 24,318/2015, expedida por el notario público número ochenta y ocho de Monterrey, Nuevo León.
- 2) Documental privada. Escrito de siete de junio del año en curso y recibido el mismo día por la *Comisión Municipal*, por medio del cual el representante del *PRI*, le solicita se constituya en el domicilio de las casillas ubicadas en la sección 841.
- 3) Documental privada. Escrito de siete de junio del año en curso y recibido el mismo día por la *Comisión Municipal*, por medio del cual el representante del *PRI*, le solicita de nuevo se constituya en el domicilio de las casillas ubicadas en la sección 841.
- 4) Documental vía informe. Escrito del pasado dieciséis de junio, dirigido al Secretario de Seguridad Pública del Municipio de Juárez, Nuevo León.
- 5) Documental vía informe. Consistente en el escrito del mismo día dieciséis, dirigido al Director de Fuerza Civil de Nuevo León.

9

Por su parte, en su sentencia, el *Tribunal Responsable* únicamente tuvo en consideración la prueba identificada con el número 1), así como una hoja de incidentes de la casilla 841 contigua 3.

En consecuencia, si el *Tribunal Responsable* no valoró todo el material probatorio ofrecido y aportado por la *Alianza* (y el resto de las partes,

¹¹ Véase la audiencia de treinta de junio de dos mil quince, agregada al cuaderno accesorio 3 del expediente SM-JRC-164/2015.

destacadamente, la *Comisión Municipal*), se infringieron las formalidades esenciales del procedimiento, particularmente el derecho de defensa de las partes, en la medida en que este derecho comprende, como más adelante se explica, la valoración conforme a las reglas aplicables de los medios convictivos ofrecidos y aportados.

5.2.2. Inaplicación del artículo 312, párrafo cuarto, *in fine* de la Ley Electoral Local

También es sustancialmente fundado el disenso enderezado contra la inadmisión de una prueba superveniente.

El *PRI* y el candidato de la *Alianza* a la presidencia municipal se duelen del desechamiento de una prueba superveniente, decretado por el presidente del *Tribunal Responsable* y confirmado por el pleno al conocer del recurso de reclamación interpuesto en su contra. El rechazo de la probanza se apoyó en el artículo 312, cuarto párrafo, de la *Ley Electoral Local*, que únicamente admite la presentación de esta clase de pruebas hasta antes de la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos, pues para cuando en este caso el medio convictivo fue propuesto, dicha audiencia ya se había celebrado.

Ambos promoventes ahora plantean la inaplicación de la porción normativa respectiva del artículo 312 referido. Proponen, a fin de sustentar esta petición, que “es inconstitucional, inconveniente y violatoria de los principios rectores de la materia electoral (principalmente el de certeza)”. También expresan como preceptos conculcados los artículos 1º, 17 y 133 de la *Constitución Federal*, así como 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues en su concepto:

- Aceptar el ofrecimiento de una prueba superveniente hasta antes de la celebración de la audiencia es una denegación de justicia, “porque no hay intención del legislador de llegar a la verdad”.
- Se trata de una norma vigente a partir de mil novecientos ochenta y seis, es decir, mucho antes de las reformas constitucionales de dos mil once.

Desde la perspectiva de estos actores, lo constitucionalmente adecuado es que sea posible el ofrecimiento de pruebas supervenientes hasta antes del dictado de la sentencia.

Como se dijo, en esencia asiste la razón a los actores, aunque el análisis de regularidad constitucional debe hacerse a la luz de las disposiciones aplicables (hayan o no servido de fundamento de la pretensión en la demanda), conforme el principio *iura novit curia* (el juez conoce el derecho), como lo autoriza el artículo 23, párrafo 3, de la *Ley de Medios*.

El derecho de audiencia, tal y como se conceptúa de manera uniforme por la doctrina¹² y la jurisprudencia nacional,¹³ tiene como finalidad que se fije la posición del interesado sobre aquello que pudiera resultarle perjudicial, así como de ofrecer y aportar los elementos de prueba que estime conducentes para apoyar sus afirmaciones sobre hechos.¹⁴ Esta garantía forma parte medular de las formalidades esenciales del procedimiento o del también llamado “debido proceso legal”,¹⁵ entendido este como el “conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos”.¹⁶

¹² De acuerdo con Ovalle Favela “se denomina *garantía de audiencia* al derecho que el artículo 14 constitucional otorga a cada persona para que, previamente a cualquier acto de autoridad que pueda llevarlo a privar de sus derechos o posesiones, se le dé una oportunidad razonable de defenderse en juicio, de probar y alegar ante tribunales independientes, imparciales y establecidos con anterioridad en la ley”. Ovalle Favela, José, *Garantías constitucionales del proceso*, 3a. ed., México, Oxford University Press, 2007, p. 39.

¹³ El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la “garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga ‘se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento’. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado”. Véase la jurisprudencia P./J. 47/95, de rubro “FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO” (9a. época, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, tomo II, diciembre de 1995, p. 133).

¹⁴ El derecho a presentar pruebas con relevancia para la decisión de un litigio, “es un aspecto esencial del derecho al debido proceso y debe reconocerse que pertenece a las garantías fundamentales de las partes”. Taruffo, Michele, *La prueba*, traducción de Laura Manríquez y Jordi Ferrer Beltrán, Madrid, Marcial Pons, 2008, p. 56.

¹⁵ Véase artículo 8, apartado 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que recoge las garantías judiciales generales. Las garantías mínimas o específicas contempladas en el apartado 2 del propio precepto, las cuales se encuentran referidas a los procesos penales, resultan igualmente aplicables a procesos de otro tipo. En este sentido, *Caso de la ‘Panel Blanca’ (Paniagua Morales y otros) vs. Guatemala*. Fondo. Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C No. 37. Párr. 149; *Caso del Tribunal Constitucional vs. Perú*. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C No. 71. Párrs. 69 a 71; y *Caso Nadege Dorzema y otros vs. República Dominicana*. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 24 de octubre de 2012. Serie C No. 251. Párr. 157.

¹⁶ Corte Interamericana de Derechos Humanos. *Garantías judiciales en Estado de Emergencia* (arts. 27.2, 25 y 8 Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-9/87 de 6 de octubre de 1987. Serie A No. 9. Párr. 27.

Como es patente, ese derecho a ofrecer y desahogar las pruebas que sean necesarias para acreditar la pretensión de una de las partes, es decir, el derecho de prueba,¹⁷ se encuentra íntimamente ligado al derecho de defensa, pues este último “no es posible si se impide a alguna de las partes el derecho a traer al proceso los medios justificativos o demostrativos de las propias alegaciones o los que desvirtúan las de la parte contraria”.¹⁸ Así entendido, el derecho de prueba implica, como mínimo, un haz de facultades en favor de quienes litigan una controversia en tribunales, consistentes en: a) la apertura de un periodo probatorio suficiente; b) la posibilidad de ofrecer medios de prueba; c) que esos medios de prueba, de satisfacerse las exigencias requeridas, sean admitidos por el juez de la causa; d) que la prueba admitida sea desahogada, y e) que la prueba desahogada sea valorada por el juez o tribunal.¹⁹

Con motivo de los alcances de esta prerrogativa constitucional, en congruencia con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,²⁰ esta sala ha precisado que el derecho de prueba no es

12

¹⁷ Para Picó i Junoy, el derecho a la prueba “es aquel que poseen las partes consistente en la utilización de los medios probatorios necesarios para formar la convicción del órgano jurisdiccional acerca de lo discutido en el proceso, por lo que todas las pruebas pertinentes solicitadas cumpliéndose los requisitos legales deben ser admitidas y practicadas”. Picó i Junoy, Joan, *Las garantías constitucionales del proceso*, 2ª ed., Barcelona, J.M. Bosch, 2012, p. 177.

¹⁸ *Ibidem*, 179.

¹⁹ Carocca Pérez, Alex, *Garantía constitucional de la defensa procesal*, Barcelona, J. M. Bosch, 1998, p. 286. En el contexto constitucional colombiano, Ruiz Jaramillo entiende el derecho fundamental a la prueba “como la posición jurídica fundamental que posee... aquel que tiene el carácter de parte o de alguna forma de interviniente o que pretende serlo en un futuro proceso, consistente en la exigencia la juez del aseguramiento, admisión, práctica y valoración de la prueba propuesta con el fin de propender por la formación de la convicción de éste sobre la verdad de los hechos que son presupuesto del derecho o del interés material que se disputa”. Ruiz Jaramillo, Luis Bernardo, “El derecho a la prueba como derecho fundamental” en *Revista Estudios de Derecho*, Universidad de Antioquia, vol. LXIV, núm. 143, junio 2007, pp. 183 y 184. En sentido similar, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia ha sostenido: “La garantía de audiencia, consagrada en el artículo 14 de la Constitución Federal, tiene como parte medular el respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, las que han sido definidas por este Alto Tribunal... como aquellas etapas o trámites que garantizan al gobernado una adecuada defensa antes del acto de privación y que se traducen, entre otros supuestos, en la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa. Ahora bien, la citada formalidad esencial implica el establecimiento de una serie de reglas que permiten a las partes probar los hechos constitutivos de su acción o de sus excepciones o defensas, dentro de un justo equilibrio que, por un lado, no dejen en estado de indefensión a las partes y, por el otro, aseguren una resolución pronta y expedita de la controversia; además, el reconocimiento de la garantía de defensa, en materia de prueba, se traduce en el otorgamiento de una serie de facultades a favor de los litigantes, entre las que destacan: que se abra un término probatorio suficiente; que propongan sus medios de prueba; que los medios de prueba debidamente propuestos sean admitidos; que la prueba admitida sea practicada; y que la prueba practicada sea valorada”. Tesis 1ª XLIV/2000, de rubro “PRUEBAS EN LOS JUICIOS MERCANTILES. LOS ARTÍCULOS 1201 Y 1405 DEL CÓDIGO DE COMERCIO QUE ESTABLECEN EL PLAZO PARA PRACTICARLAS, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE AUDIENCIA (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA ANTES DE LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL 24 DE MAYO DE 1996)”. 9ª Época. *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, tomo XII, diciembre de 2000, p. 259.

²⁰ Sobre el artículo 8, apartado 2, inciso c) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la concesión del tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa, la Corte ha establecido que “Si el Estado pretende limitar este derecho, debe respetar el principio de legalidad, argüir de manera fundada cuál es el fin legítimo que

absoluto.²¹ Por el contrario, conforme cánones de idoneidad, indispensabilidad y proporcionalidad, que en todo caso eviten que las limitaciones resulten injustificadas o que traigan aparejada la violación al contenido esencial del derecho fundamental, este derecho es susceptible de configuración legal mediante la cual se incorporen requisitos o limitaciones probatorias,²² entre los que se encuentran: a) la pertinencia de la prueba,²³ b) la licitud de la prueba,²⁴ y c) límites temporales y formales establecidos en los ordenamientos procesales correspondientes.²⁵

Siempre que sean conformes con la *Constitución Federal*, esos requisitos que condicionan el derecho de prueba no restringen indebidamente la capacidad probatoria de las partes, ni las priva de su derecho de aportarlas, sino que únicamente las constriñe a cumplir una obligación que constituye una formalidad más del procedimiento, que debe ser acorde con la finalidad misma del derecho de prueba y su ejercicio en el seno de una relación jurídico procesal, así como para hacer compatible dicho ejercicio con otros derechos e intereses constitucionalmente relevantes; de tal suerte, pueden preverse normas que tiendan a evitar que se ofrezcan pruebas cuya obtención haya sido mediante la vulneración de derechos fundamentales de terceros,²⁶ o que sean de aquellas que no guarden relación con los hechos motivo de la controversia, o que no tengan aptitud para probarlos, lo que prolongaría de manera injustificada el procedimiento.

13

Lo que se cuestiona del artículo 312, párrafo cuarto, de la *Ley Electoral Local* no es el establecimiento de un límite temporal para el ofrecimiento y aportación de pruebas supervenientes, esto es, aquellos elementos de convicción surgidos después del plazo legal en que deban aportarse los elementos probatorios y aquellos existentes desde entonces, pero que el promovente, el compareciente o la autoridad electoral no pudieron ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir obstáculos que no estaban a su alcance superar.

pretende conseguir y demostrar que el medio a utilizar para llegar a ese fin es idóneo, necesario y estrictamente proporcional. Caso contrario, la restricción del derecho de defensa del individuo será contraria a la Convención". *Caso Barreto Leiva vs. Venezuela*, Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 30 de junio de 2009. Serie C No.206. Párr. 55.

²¹ Sentencia dictada en el juicio de revisión constitucional electoral identificado con la clave SM-JRC-89/2013, en sesión pública de 12 de septiembre de 2013.

²² Dichas limitaciones se derivan de las propias disposiciones legales aplicables.

²³ La prueba debe tener relación con el objeto del proceso. Picó i Junoy, Joan. *op. cit.* 180.

²⁴ La probanza debe obtenerse o desahogarse sin transgresión a derechos fundamentales. *Ibidem*, 181.

²⁵ El derecho de prueba debe ser ejercitado en los plazos y en la forma en que la normativa aplicable lo disponga. *Ibidem*, 183.

²⁶ Así, por ejemplo, el artículo 16, párrafo décimo segundo, *in fine*, de la propia *Constitución Federal*.

El disenso se centra, en efecto, en el momento procesal determinado por la ley para que se cierre la oportunidad de ofertar esta clase de probanzas. Desde esta perspectiva, no existe controversia acerca de la existencia de una finalidad constitucionalmente legítima que sirva de sustento, ni tampoco en relación a la idoneidad de la medida que limita la posibilidad de ofrecer medio de prueba de carácter superveniente a una fase procesal en concreto. De hecho, esta clase de medidas normativas, en el marco de la configuración legal recién mencionada, son usuales en todo ordenamiento procesal, dado que los juicios no pueden permanecer abiertos indefinidamente, ni el desahogo de todas las fases procesales, normalmente de carácter preclusivo, puede estar a disposición de las partes del mismo.

14

La cuestión se centra en determinar si la medida legislativa bajo análisis resulta necesaria, esto es, que dentro de todas las alternativas posibles al alcance del legislador, que igualmente permitan la satisfacción del objeto propuesto con la medida, se haya optado por aquella que restringe en la menor medida posible el derecho constitucional objeto de la intervención. Así, conforme a este juicio de indispensabilidad, “siempre que pueda identificarse algún otro límite adecuado que, por infringir un «daño menor», implique una «alternativa menos gravosa o restrictiva de los derechos», habrá de desecharse el límite objeto de control”.²⁷

En este caso, parece claro que limitar de manera inexorable a que las pruebas supervenientes deban presentarse antes de la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos no supera el juicio de indispensabilidad o necesidad, por cuanto existe, al menos, otro momento procesal que, con el mismo grado de idoneidad y eficacia para el adecuado desenvolvimiento del proceso y el dictado de las resoluciones dentro de los plazos legales previstos, limitaría con menor intensidad el derecho de defensa en su vertiente probatoria.

Esta sala regional estima que dicho momento procesal lo constituye el cierre de instrucción, razón por la cual las pruebas supervenientes han de ser admitidas siempre y cuando sean aportadas antes de ese momento.

En efecto, de acuerdo con el artículo 305 de la *Ley Electoral Local*, una vez admitido el juicio, se corre traslado a los terceros interesados y a las autoridades demandadas para que, respectivamente, dentro del término de setenta y dos horas, expresen lo que a sus derechos correspondiere y rindan

²⁷ Medina Guerrero, Manuel, *La vinculación negativa del legislador a los derechos fundamentales*, Madrid, Mc Graw-Hill, 1996, p. 130.

un informe con justificación; asimismo se cita a las partes a una audiencia de Ley. Celebrada esta audiencia de calificación, admisión, recepción de pruebas y alegatos, el *Tribunal Responsable* cuenta, ordinariamente, con un plazo de hasta diez días para dictar sentencia.

Conforme a este esquema, en la ley no se contiene precepto o principio alguno que impida en casos fundados y motivados, que durante ese periodo se continúe con la instrucción del proceso, es decir, con la posibilidad de que se alleguen elementos que resulten indispensables para la resolución completa de la controversia.

En suma, la finalización de la audiencia de pruebas y alegatos no se encuentra inidentificada con lo que procesalmente se denomina “cierre de instrucción”; esto es, con el proveído a cargo del magistrado respectivo mediante el cual, en su concepto, se encuentra en el expediente todo el acervo probatorio requerido para el dictado de la sentencia.

En este contexto, en tanto ese cierre de instrucción no acontezca, existiría la posibilidad de que se ofrecieran y aportaran aquellos elementos convictivos surgidos o conocidos con posterioridad a la celebración de la citada audiencia.²⁸

15

En la lógica de limitar en la menor medida posible el derecho de defensa en el aspecto probatorio, el cierre de instrucción constituiría un momento procesal que, evidentemente, incidiría con una intensidad menor la posibilidad de aportar pruebas supervenientes.

Asimismo la admisión de pruebas supervenientes hasta antes del momento del cierre de instrucción permitiría que el *Tribunal Responsable* tomara las medidas necesarias para respetar el principio de contradicción, de tal suerte que pudiere existir un posicionamiento de quienes pudieran resultar afectados con la admisión de dicha probanza, aspecto que constituye igualmente una de las formalidades esenciales del procedimiento o del debido proceso legal.²⁹

²⁸ Como lo dispone el artículo 16, párrafo 4, de la *Ley de Medios*, que, en lo que interesa, establece como excepción a la regla general de que no podrán tomarse en cuenta para resolver las pruebas ofrecidas o aportadas fuera de los plazos legales, precisamente, las pruebas supervenientes, siempre y cuando se aporten antes del cierre de la instrucción.

²⁹ Véase la tesis 1a. CCVIII/2013 (10ª) de rubro: “PRINCIPIO DISPOSITIVO. SU ALCANCE FRENTE AL JUZGADOR COMO DIRECTOR DEL PROCESO.” *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, libro XXII, julio de 2013, tomo 1; p. 567, registro 2 004 059.

Finalmente, esta conclusión encontraría sustento en el artículo 1º constitucional, conforme el cual, todas las autoridades nacionales (federales y estatales o del Distrito Federal), en sus respectivos ámbitos competenciales, tienen obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de acuerdo con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. De acuerdo con estas directrices, resulta claro que igualmente debe preferirse toda aquella interpretación que robustezca el derecho humano de que se trate, en el caso, el derecho de defensa reconocido por la *Constitución Federal*.

Tal es el caso en el presente asunto, que si bien el medio de convicción surgió antes de la audiencia de pruebas y alegatos, el promovente desconocía su existencia hasta el pasado primero de julio, cuando el representante propietario del Partido del Trabajo se la entregó al representante del *PRI*,³⁰ por tanto, no se puede restringir su ofrecimiento al no ser exigible su exhibición antes del inicio de la audiencia. En autos no está rebatido que el oferente la aportó en cuanto la conoció y la tenía en su poder, esto es, el dos de julio del año en curso, dos días después de celebrada la audiencia de calificación, admisión, recepción de pruebas y alegatos.³¹

16

Cabe señalar, que en la audiencia de pruebas y alegatos no se declaró cerrada la instrucción, toda vez que el magistrado instructor requirió diversos informes para el desahogo de pruebas ofrecidas, otorgando un plazo de setenta y dos horas a las autoridades requeridas. Fue hasta el ocho de julio que tuvo por debidamente integrado el expediente JI-089/2015 y sus acumulados JI-109/2015 y JI-134/2015, y ordenó dictar la sentencia correspondiente.³²

Por tanto, debe inaplicarse en el caso concreto el artículo 312, párrafo cuarto, de la *Ley Electoral Local*, en la porción normativa que dice “la celebración de la audiencia.”

5.2.3. En virtud del resultado obtenido en los apartados 5.2.1. y 5.2.2. es innecesario el análisis del resto de los motivos de inconformidad alegados por el *PRI* y Heriberto Treviño Cantú

³⁰ Véase escrito agregado en el cuaderno accesorio 3 del referido expediente.

³¹ Véase la audiencia celebrada el treinta de junio pasado y el escrito por el que se ofrece la prueba superveniente, agregados en el cuaderno accesorio 3 del expediente SM-JRC-164/2015.

³² Véase acuerdo agregado al cuaderno accesorio 4 del referido expediente. Los juicios de inconformidad locales se acumularon el tres de julio, acuerdo agregado al cuaderno accesorio 1 del mismo expediente.

El *Tribunal Responsable* conculcó, en su vertiente probatoria, el derecho de defensa del *PRI* y el candidato de la *Alianza* a la presidencia municipal, pues no valoró todas las probanzas propuestas y admitidas que guardaban relación con los hechos base de la impugnación.

También se violó el mismo derecho por el desechamiento de la prueba superveniente. Ambas transgresiones implican, además, que la sentencia reclamada no sea congruente ni exhaustiva, por cuanto no se efectuó un pronunciamiento completo de la controversia propuesta.

Lo que resulta suficiente para revocar, en lo que fue materia de impugnación, la sentencia impugnada.

Sobre esta base, resulta innecesario estudiar los restantes agravios que hacen valer los promoventes, relacionados con la valoración del cúmulo probatorio que obra en el expediente local en relación con la causal de nulidad que invocaron, presión sobre el electorado en las siete casillas de la sección 841, del distrito local 22 de Nuevo León, en el municipio de Juárez.

5.3. Irregularidades en el estudio de las casillas.

17

Como se estableció anteriormente, Encuentro Social considera que la autoridad responsable, incurrió en una violación a los principios de exhaustividad, legalidad, congruencia, equidad e igualdad al realizar un indebido estudio de la causal de nulidad prevista en el artículo 329, fracción IV de la *Ley Electoral Local*, en algunas de las casillas impugnadas.

Razón por la cual, a continuación se realizará, por una parte, el estudio de las irregularidades reclamadas por Encuentro Social respecto de la indebida integración de las **cinco** casillas que refiere en su demanda y, por otra, el estudio de las **tres** casillas que, en consideración del partido no se debió anular la votación.

Encuentro Social aduce que en las casillas 835 contigua 1, 847 básica, 2391 básica, 2400 contigua 1, y 2661 contigua 1, se confirmó indebidamente la votación, pues tal y como alegó ante la responsable, la votación se recibió por personas que no fueron designadas por la autoridad comicial.

Respecto de la casilla 835 contigua 1, la autoridad responsable consideró que estuvo integrada debidamente pues las personas que fungieron como

secretaria y tercera escrutadora, se encontraban facultadas, en conformidad con el encarte vigente, para recibir la votación.

En este sentido, Daniela Ramírez Hernández, quien se desempeñó como secretaria de casilla, sí se encuentra acreditada como secretaria en dicha casilla,³³ además de encontrarse en la lista nominal de la sección 835, contigua 2, rango alfabético “O-Z”, página 5, recuadro 87. Por otra parte, Abigail Rivera González también estaba facultada para fungir como tercera escrutadora en virtud de pertenecer a la sección, tal como se advierte de la lista nominal de la casilla 835 contigua 2, página 9, rango alfabético “O-Z”, recuadro número 170.

18

De la casilla 847 básica, se cuestiona a “Blanca Alicia Briagas” como primera escrutadora. La responsable precisó que el nombre completo de la ciudadana es Prisciliana Blanca Alicia García Briagas, tal y como aparece en la lista nominal de la casilla 847 básica, página 30, rango alfabético “A-G”, recuadro número 616. Lo cual es suficiente para arribar a la conclusión de que quien actuó en la casilla en comento, sí se encuentra inscrita en la sección electoral correspondiente, sin ser óbice para llegar a tal conclusión, que en el acta de jornada electoral levantada por los funcionarios de casilla se haya obviado uno de los nombres de la funcionaria e invertido sus apellidos (en el acta de jornada electoral aparece el nombre de Blanca Alicia Briagas García), pues al firmar lo hace como “Blanca Alicia G B”, lo que denota el orden correcto de sus apellidos.

Al respecto, conviene señalar que ante el número de actas y rubros que el día de la jornada electoral tienen que ser requisitados por los funcionarios de casilla, así como el número de personas que participan es evidente que la omisión de uno de los nombres de algún funcionario de casilla, puede derivarse de una omisión o equivocación, además de que en los apartados de instalación de casilla y cierre de votación del acta de la jornada electoral, no aparece que se haya suscitado incidente alguno relacionado con la inconformidad alegada, por lo que se considera que la omisión de uno de los nombres de la funcionaria y el hecho de invertir los apellidos no puede dar lugar a la anulación de la casilla.³⁴

³³ Véase disco compacto agregado en el cuaderno accesorio 2 del expediente SM-JRC-164/2015, que contiene, entre otros, Encarte en archivo Excel, remitido por la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León en cumplimiento a un requerimiento formulado por el *Tribunal Responsable*.

³⁴ Criterio similar se sostuvo en el juicio de inconformidad con clave SUP-JIN-265/2012

En la casilla 2391 básica fungió como tercera escrutadora Ana Catalina Cordero Ortiz, quien tal y como lo señaló la responsable, pertenece a la sección, al aparecer en la lista nominal de la casilla 2391 básica, rango alfabético “A-L”, página 7, recuadro 131.

La ciudadana Araceli Barboza Puebla, quien fungió como tercera escrutadora en la casilla 2400 contigua 1, se encontraba autorizada para recibir la votación. Lo anterior, por pertenecer a la sección correspondiente lo cual, se puede comprobar al consultar la página 4, recuadro 65 de la lista nominal de la casilla 2400 básica, rango alfabético “A-L”.

Finalmente, como lo precisó la autoridad, en la casilla 2661 contigua 1, el tercer escrutador estaba facultado para recibir la votación pues aparece su nombre en la lista nominal. El nombre de Juan Rivera Flores (aparece en la acta de jornada electoral como “Juan Florez Rivera”) se encuentra en la lista nominal de la casilla 2661 contigua 2, rango alfabético “M-Z” página 12, recuadro 243. Es necesario puntualizar que el orden de los apellidos asentados en el acta no lleva a suponer que el ciudadano cuestionado no haya sido quien desempeñó la función que le fue encomendada.

19

En este sentido, aun cuando se advierte que en el acta levantada por los funcionarios de casilla se invirtieron los apellidos del funcionario, ello no es suficiente para estimar que, en la especie, se actualiza la causal de nulidad respectiva, pues, el cambio de apellidos pudo acontecer por equivocación.

Cabe precisar que, en relación a lo anterior, no se hizo valer ninguna irregularidad, pues la hoja de incidentes carece de inscripción alguna. Además, se recalca que el invertir los apellidos de los funcionarios es un error usual que se presenta al momento del llenado.³⁵

En este sentido, no le asiste razón a Encuentro Social pues el *Tribunal Responsable* determinó correctamente que si bien, en las casillas antes mencionadas recibieron la votación ciudadanos que no fueron designados por el consejo distrital respectivo con anterioridad a la jornada electoral, y no

³⁵ Cuando los nombres de los funcionarios se apuntaron en los documentos de forma imprecisa, esto es, cuando el orden de los nombres o de los apellidos se invierte, o son escritos con diferente ortografía, o falta alguno de los nombres o de los apellidos, ello supone un error involuntario del secretario, quien es el encargado de llenar las actas; además de que, es usual que las personas con más de un nombre utilicen en su vida cotidiana solo uno de ellos. Véanse las sentencias de la Sala Superior de los juicios: SUP-REC-340/2015; SUP-JIN-39/2012 Y ACUMULADO SUP-JIN-43/2012; SUP-JIN-100/2012; SUP-JRC-456/2007 Y SUP-JRC-457/2007; y SUP-JIN-252/2006. Así como las diversas: SM-JIN-37/2015 y SM-JIN-56/2015.

se hizo un corrimiento de funcionarios, éstos pertenecen a la sección correspondiente, por lo que resultó válida la votación recibida (con excepción de Daniela Ramírez Hernández).³⁶

En atención al principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, a efecto de que el sufragio de los ciudadanos no se vea invalidado por infracciones menores, para declarar la nulidad de la votación de las casillas con base en dicho supuesto debe vincularse con otros indicios o irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables que pongan en duda la certeza de la votación, así como la autenticidad de los resultados ahí obtenidos.

Respecto de las casillas 839 contigua 4, 2320 básica y 2333 básica, Encuentro Social considera que no se debió decretar la nulidad de la votación, pues las casillas fueron integradas debidamente.

En relación a las casillas 839 contigua 4 y 2333 básica, no le asiste razón al partido promovente pues, tal y como lo señaló la responsable en la resolución impugnada, los funcionarios reclamados ante ella no se encuentran en la lista nominal de las respectivas secciones.

20

En este sentido, ni María de los Ángeles Bazaldua de la Rosa, ni Claudia Margarita Hernández Bustos (quienes fungieron como segunda y tercer escrutadora, respectivamente, en la casilla 839 contigua 4), ni Mario Alberto González Rodríguez (quien fungió como segundo secretario en la casilla 2333 básica), se encuentran en las correspondientes listas nominales.

De esta manera, el simple hecho de integrar la mesa directiva de casilla, cualquiera que sea el cargo, una persona no designada por el organismo electoral competente y que no aparezca en la lista nominal de electores correspondiente a la sección electoral, se considera una transgresión que ocasiona la nulidad de la votación recibida en las casillas.³⁷

En este orden de ideas, aunque es válido que ciudadanos que originalmente no hayan sido designados en el encarte por la autoridad administrativa

³⁶ Esta circunstancia no cambia la situación pues aunque existió una imprecisión en la respuesta de la responsable, la mesa directiva de casilla sí se integró debidamente.

³⁷ Criterio sostenido en la jurisprudencia 13/2002, de rubro: "RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR Y SIMILARES)". *Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación*, Suplemento 6, Año 2003, páginas 62 y 63.

electoral sustituyan a los funcionarios designados ante la ausencia de los mismos, solo se encuentran facultados para desempeñar el cargo cuando pertenezcan a la sección correspondiente. Así pues, como lo estableció la responsable, se acredita la causal de nulidad contemplada en el artículo 329, fracción IV, de la *Ley Electoral Local*.

Cuestión diversa acontece en la casilla 2320 básica, cuya votación fue anulada por la autoridad al establecer que Teodoro Alejo Gutiérrez (quien fungió como primer escrutador), no pertenece a la sección. No obstante, del acta de jornada electoral, la constancia de clausura y el acta de escrutinio y cómputo, esta Sal Regional advierte que el nombre del ciudadano es Alejo Gutiérrez Teodoro, quien sí aparece en el encarte de la propia casilla como segundo escrutador,³⁸ así como en la lista nominal de la casilla 2320 básica, rango alfabético “A-Z”, página 15, recuadro 295. Atento a lo manifestado, la integración de la mesa directiva sí cumplió con los requisitos legales pues el funcionario estaba facultado para recibir la votación por pertenecer a la sección.

De tal suerte, lo procedente es dejar insubsistente la nulidad decretada de la votación recibida en la casilla 2320 básica.

21

5.4. Falta de exhaustividad en el análisis de agravios

Félix César Salinas Morales, registrado por la *Alianza* en la tercera regiduría, alega una falta de exhaustividad por parte del *Tribunal Responsable*, al sostener que no analizó los agravios “octavo, noveno y décimo” de su demanda, en los cuales planteó que el *Comité Municipal* no tomó en cuenta el último párrafo del artículo 271 de la *Ley Electoral Local*, que prevé la posibilidad de que se asigne una regiduría más.³⁹ En su concepto, no es

³⁸ Véase disco compacto agregado en el cuaderno accesorio 2 del expediente SM-JRC-164/2015, que contiene, entre otros, Encarte en archivo Excel, remitido por la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León en cumplimiento a un requerimiento formulado por el *Tribunal Responsable*.

³⁹ En este contexto, el último párrafo del artículo 271 de la *Ley Electoral Local* prevé la posibilidad de asignar una regiduría más por el principio de representación proporcional siempre que:

- a. El partido de que se trate no obtenga la mayoría ni la primera minoría.
- b. Obtenga más de dos veces el porcentaje mínimo (6% de la votación válida emitida).
- c. La cantidad total de regidores de representación proporcional no debe ser superior a los de mayoría.
- d. El partido que obtuvo la primera minoría no debe resultar con igual o menor número de regidores de representación proporcional que otro partido.

“Artículo 271. Para la aplicación de los elementos de asignación del artículo anterior se estará al siguiente procedimiento:

- I. Se asignará una regiduría a todo aquel partido que obtenga el Porcentaje Mínimo;
- II. Si aún hubiere regidurías por aplicar se empleará el Cociente Electoral; en esta forma se asignarán a los partidos tantas regidurías como veces contenga su votación restante dicho cociente; y

posible que a la *Alianza* y al *PAN* les haya correspondido a cada uno el mismo número de regidurías por el principio de representación proporcional, cuando la *Alianza* cuenta con 12.65% más de votación (10,921 votos), por lo que estima que debe asignársele a la *Alianza* una regiduría más por este principio, misma que le correspondería a su persona.

Como apoyo de su pretensión, alegó que el *Comité Municipal* violentó el principio de sobrerrepresentación y subrepresentación que prevé el artículo 116 de la *Constitución Federal*.

En el caso, el *Tribunal Responsable* al pronunciarse sobre la demanda interpuesta por el actor, afirmó que la cuestión a dilucidar era la aplicación de las reglas previstas para la asignación de regidurías por el principio de representación proporcional, en relación con el principio de paridad de género, al considerar que el planteamiento del actor se centraba únicamente en que esta debía realizarse en atención al género de la última regiduría de la planilla de mayoría asignada e intercalando la asignación entre la mejor minoría y la minoría siguiente.

- 22 Sobre esta base, razonó que la asignación de estos cargos siempre debe recaer sobre la persona ubicada en el primer lugar de la planilla registrada por la mejor minoría y, en atención al principio de paridad de género, intercalar el género hasta agotar los regidores a que tiene derecho; posteriormente, en consideración a la última asignación de la mejor minoría realizada, se asignará a los que le correspondan a la minoría siguiente.

Como consecuencia de lo anterior, estimó adecuada la asignación realizada por la *Comisión Municipal* y, por ende, declaró infundado el concepto de anulación.⁴⁰

Como se advierte fácilmente, la sentencia reclamada carece de pronunciamiento alguno en relación al resto de los agravios planteados por el accionante, relacionados con la asignación de una regiduría más en términos del último párrafo del artículo 271 de la *Ley Electoral Local*. Ante ello, se

III. Si después de aplicar el Cociente Electoral quedaran Regidurías por aplicar, se asignarán por el Resto Mayor siguiendo el orden decreciente de los restos de votos no utilizados. Exclusivamente a los partidos que no obtengan la mayoría ni la primera minoría se les asignará una Regiduría más, si hubieren obtenido más de dos veces el porcentaje mínimo, siempre y cuando la cantidad total de Regidores de representación proporcional no sea superior a los de mayoría, ni que el partido que haya obtenido la primera minoría resulte con igual o menor número de Regidores de representación proporcional que otro partido.”

⁴⁰ Véase apartado 1, del considerando séptimo de la sentencia impugnada, páginas 3 a 6 de la misma.

considera que el *Tribunal Responsable* omitió pronunciarse respecto de los motivos de inconformidad “octavo, noveno y décimo” planteados por Félix César Salinas Morales en la instancia local, en contravención de los principios de congruencia y exhaustividad.

Por otra parte, debe analizarse el diverso planteamiento del actor, Félix César Salinas Morales, relativo a la falta de valoración de pruebas ofrecidas por ser desechadas de manera indebida, el cual se estima ineficaz.

El *Tribunal Responsable* en la audiencia celebrada el veintiséis de junio de dos mil quince,⁴¹ desechó las documentales públicas ofrecidas con la demanda consistentes, entre otras, en las actas de inicio, cierre y escrutinio y cómputo de las casillas instaladas en el municipio de Juárez, las de recuento de paquetes, las de constancias de mayoría y de representación proporcional otorgadas por la *Comisión Municipal*, al “resultar inconducentes, toda vez que no aportarían ningún dato trascendental para resolver la cuestión planteada por el inconforme.”

Tal como lo reconoce el enjuiciante las pruebas ofrecidas fueron desechadas durante la audiencia, por ello no fueron tomadas en consideración por el órgano jurisdiccional local. Sin que se esgrima argumento alguno tendente a cuestionar las razones por las cuales el *Tribunal Responsable* desechó los medios de convicción aportados por el actor, pues solo se limita a manifestar de forma genérica que tal determinación fue indebida.

Finalmente, respecto a que no fue analizada la constancia de cómputo del Ayuntamiento de Guadalupe, Nuevo León, le asiste la razón al actor, toda vez que ésta fue aportada en el escrito de alegatos que presentó antes de la audiencia de ley, respecto del cual el *Tribunal Responsable* acordó que sería valorado en el momento procesal oportuno, sin que ello sucediera, en contravención de los principios de congruencia y exhaustividad.

En consecuencia, el *Tribunal Responsable*, deberá pronunciarse sobre este medio de convicción.

6. EFECTOS

Las conclusiones alcanzadas en los apartados que anteceden resultan suficientes para revocar, en lo que fue materia de impugnación, la sentencia

⁴¹ Agregada en el cuaderno accesorio 1 del expediente SM-JRC-164/2015.

impugnada. En tal virtud, como entre las violaciones constatadas se encuentran las relativas a los principios de congruencia y exhasutividad, y toda vez que aún existe tiempo para que el propio *Tribunal Responsable* repare tales violaciones, dado que los ayuntamientos en Nuevo León se instalarán hasta el treinta y uno de octubre próximo,⁴² lo procedente es ordenar al *Tribunal Responsable* que –**previa vista** que dé a las partes en los juicios locales, con el acta fuera de protocolo 81,241/2015, a fin de que en el plazo prudente que al efecto conceda, formulen las alegaciones que cada una de ellas estimen pertinentes– dicte una nueva resolución en la cual analice:

6.1. La causa de nulidad de presión sobre el electorado invocada en las siete casillas de la sección 841, con base en todas las pruebas aportadas, admitidas y desahogadas, así como en el acta fuera de protocolo 81,241/2015, aportada como prueba superveniente;

6.2. Lo alegado por Félix César Salinas Morales, en sus agravios identificados como “octavo, noveno y décimo”, así como que se pronuncie resepcto de la “constancia de cómputo del Ayuntamiento de Guadalupe, Nuevo León” aportada por el actor en su escrito de alegatos;

6.3. Asimismo, debe tomar en consideración que se deja insubsistente la nulidad decretada en la casilla 2320 básica, en términos del apartado 5.3.

Lo mandatado deberá llevarlo a cabo dentro del plazo de cinco días contados a partir de que tenga debidamente integrado el expediente respectivo.

Una vez hecho lo anterior, dentro de las veinticuatro horas siguientes, deberá hacerlo del conocimiento de esta sala regional, adjuntando copias certificadas de las constancias respectivas, apercibido que de no cumplir lo ordenado dentro del plazo fijado, se le aplicará el medio de apremio que corresponda, en términos de lo previsto en el artículo 32 de la *Ley de Medios*.

7. RESOLUTIVOS

PRIMERO. Se **acumulan** los juicios SM-JRC-177/2015, SM-JDC-532/2015 y SM-JDC-537/2015 al diverso SM-JRC-164/2015, debido a que fue éste el primero que se registró en esta Sala Regional, por lo que se deberá glosar

⁴² En conformidad con el artículo 123 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.

copia certificada de los puntos resolutive de esta sentencia a los expedientes de los juicios acumulados.

SEGUNDO. Se **tienen por no presentados** los escritos de tercero interesado, en términos del apartado 4 de esta sentencia.

TERCERO. Se **inaplica** al caso concreto el artículo 312, párrafo cuarto, de la Ley Electoral para el Estado de Nuevo León, en la porción normativa que dice “la celebración de la audiencia.”

CUARTO. Se revoca, en lo que fue materia de impugnación, la resolución impugnada, para los efectos precisados en el apartado 6 de esta sentencia.

QUINTO: Comuníquese a la Sala Superior de este Tribunal Electoral, para los efectos constitucionales conducentes y que por su conducto se informe de la presente ejecutoria a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

NOTIFÍQUESE.

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido y, en su caso, hágase la devolución de la documentación exhibida por la responsable.

25

Así lo resolvió la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, por **unanimidad** de votos de los Magistrados que la integran, ante la Secretaría General de Acuerdos, quien autoriza y da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE

MARCO ANTONIO ZAVALA ARREDONDO

MAGISTRADO

MAGISTRADO

YAIRSINIO DAVID GARCÍA ORTIZ

REYES RODRÍGUEZ MONDRAGÓN

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

IRENE MALDONADO CAVAZOS